

HISTORIA DE LA ARGENTINA OLVIDADA
TOMO II

IGNACIO MONTES DE OCA

HISTORIA DE LA ARGENTINA
OLVIDADA

TOMO II

De la Revolución Libertadora
al Kirchnerismo (1955-2013)



Montes de Oca, Ignacio
Historia de la Argentina olvidada. Tomo II. - 1a
ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa,
2014.

416 p. ; 22,5x15,5 cm.

ISBN 978-987-628-290-1

1. Historia Argentina. I. Título
CDD 982

Diseño de tapa: Eduardo Ruiz

Primera edición: marzo de 2014

© Ignacio Montes de Oca, 2014
© Edhasa, 2014

Córdoba 744 2º C, Buenos Aires
info@edhasa.com.ar
<http://www.edhasa.com.ar>

Avda. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona
E-mail: info@edhasa.es
<http://www.edhasa.com>

ISBN: 978-987-628-290-1

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723

Impreso por Arcángel Maggio-División Libros

Impreso en Argentina

Dedicado a vos, Inés,
porque naciste con
el don de la alegría y
me diste valor para
comprender que el futuro
nunca estuvo escrito.

Índice

Prólogo.....	11
Capítulo 1. Una mitad contra la otra.....	13
Capítulo 2. Subir a la sierra o morir de impotencia.....	27
Capítulo 3. Tiempos de revolución y restauración	63
Capítulo 4. Guerra civil en el nacionalismo	101
Capítulo 5. La esperanza volada en mil pedazos.....	145
Capítulo 6. Un muerto y miles de viudas	185
Capítulo 7. El momento negro	217
Capítulo 8. Juicio y castigo a los militares.....	275
Capítulo 9. El “relato” del cuco kirchnerista	367
Epílogo. El triunfo del cuco.....	399
Bibliografía.....	405

Prólogo

En el tomo anterior de *Historia de la Argentina olvidada*, rastreamos las raíces de la intolerancia argentina hasta los tiempos de la Inquisición en España.

Un recorrido por la historia argentina hasta 1955 mostró el modo en que la violencia fue moldeando un tipo de cultura política en el que se justificaba el ataque contra el otro a partir de la revancha, las ideologías fanáticas y el uso del pasado como cantera retórica para alegar a favor del uso del terror.

El año 1955 fue sin dudas un momento de inflexión, debido a que por un lado dio inicio al periodo de violencia que más influye en el presente y, por el otro, porque a partir de entonces quedaron delineados los bandos que en la actualidad siguen disputándose el liderazgo dentro del nacionalismo, la ideología hegemónica que con pocas interrupciones ha gobernado hasta el presente a la Argentina bajo diferentes emblemas políticos.

Veremos entonces cómo el terror político y la persecución al que porta ideas diferentes fueron haciéndose más cotidianos, en un ritmo creciente que tuvo su punto de mayor virulencia en la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976.

También, cómo se usaron los eventos trágicos de todo ese período para evitar una reflexión sobre las verdaderas causas de la violencia y que la sociedad argentina prefirió utilizarlos para continuar en su costumbre de justificar su intolerancia.

Los dos tomos de *Historia de la Argentina olvidada* proponen un recorrido cronológico en el que es posible rastrear muchas de las ideas del presente y demostrar que en la actualidad no existen demasiados elementos ideológicos novedosos. Por el contrario, pareciera que la revitalización de viejas confrontaciones condiciona fuertemente los discursos de los bandos que se enfrentan en momentos en que el kirchnerismo lidera el escenario.

En la medida que los hechos se acerquen al presente, el lector hallará más elementos en los que verá reflejada su historia personal, ya sea como testigo o protagonista. Es bueno recordar entonces que todo lo descrito en este volumen busca explicar el presente, sin hacer una evaluación moral sobre las ideas, los hombres o las instituciones que son nombradas.

Por eso es que el segundo tomo de *Historia de la Argentina olvidada* puede irritar a unos y otros en la medida que cuestiona muchos de los conceptos que hasta hoy son tomados como dogma, tales como el origen de la violencia política en el pasado reciente, las alianzas con potencias extranjeras de los grupos civiles y militares más importantes de este período, la existencia de una secuencia de aniquilación que implicó directa o indirectamente a los mayores grupos políticos del presente y la corroboración del terror como uno de los factores distintivos del pueblo argentino, aunque en el presente se siga sosteniendo que se trata de una sociedad de víctimas atacada desde hace décadas por monstruos de diversa procedencia e ideología.

Iniciaremos nuestro recorrido histórico por el golpe que derrocó a Juan D. Perón el 16 de septiembre de 1955, cuando los sectores que se oponían a la permanencia de sus adversarios en el poder decidieron cubrirse de excusas democráticas para terminar otra vez con un gobierno legítimamente elegido en las urnas.

Capítulo 1

Una mitad contra la otra

La Revolución Libertadora

Sin programa político en común más allá de su resentimiento contra el líder justicialista Juan Domingo Perón y su obra, en 1955 se consolidó una coalición golpista que reunió a figuras tan opuestas como los anticlericales y los hombres de misa diaria; los militares y los comunistas; los admiradores del autoritarismo europeo y los antifascistas.

El golpe comenzó el 16 de septiembre de 1955 con la insurrección de guarniciones militares en todo el país. Mientras tanto, unos 1.500 integrantes de los Comandos Civiles Revolucionarios tomaron a punta de pistola decenas de edificios públicos y radios para lanzar proclamas revolucionarias. En su mayoría eran militantes de Acción Católica, radicales, socialistas, liberales, fascistas o miembros de la Federación Universitaria Argentina que tenían casi por único punto de coincidencia la decisión de derrocar al gobierno nacional.

La flota de guerra se unió a la rebelión¹ bajo las órdenes del almirante Isaac Rojas y amenazó con volar las destilerías ubicadas en la ribera porteña y bombardear la Casa de Gobierno si Perón no renunciaba. El almirante venía de causar 30 muertes durante el ataque a la destilería de Mar del Plata. Como había sucedido ya durante el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio anterior, los antiperonistas demostraban su desprecio por los civiles que podían caer a causa de su obsesión por destruir a sus enemigos, en particular cuando apuntaban sus cañones hacia los barrios populares identificados como canteras de militantes peronistas.

Los enfrentamientos más duros sucedieron en la provincia de Buenos Aires y especialmente en La Plata, en donde un regimiento de tanques se trabó en una larga lucha contra los sublevados. La sede central de la Alianza Nacionalista Libertadora en pleno centro porteño fue cañoneada por dos tanques y al menos dos docenas de partidarios del gobierno fueron muertos en su interior. En los combates que antecedieron al triunfo del golpe hubo en total al menos ochenta muertos.

Las hostilidades finalizaron el 21 de septiembre con la capitulación de las últimas unidades leales. Perón tuvo que refugiarse en la embajada de Paraguay y luego abordar una cañonera de ese país atracada en el puerto de Buenos Aires. Rodeado de tropas hostiles durante semanas, recibió el permiso para partir al exilio en un hidroavión paraguayo el 3 de octubre, tras acordar los términos de su destierro con los militares golpistas.

El periplo de Perón tuvo por destino países regidos por gobiernos totalitarios. Desde el Paraguay gobernado por el pro nazi Alfredo Stroessner fue a Venezuela, donde gobernaba a sangre y fuego el dictador Pérez Jiménez. Cuando el autócrata venezolano fue derrocado, recibió una oferta de refugio del déspota nicaragüense Anastasio Somoza pero se mudó a la República Dominicana, en donde el tirano Leónidas Trujillo controlaba a la oposición con sus grupos paramilitares. Allí compartió el exilio con Fulgencio Batista, recientemente derrocado. Finalmente fue a parar a la España del generalísimo Franco, el nirvana para los nacionalistas ultracatólicos.

El nuevo gobierno de facto argentino fue reconocido rápidamente por la mayoría de las potencias y países limítrofes. El ex primer ministro británico Winston Churchill dijo en septiembre de 1955 ante la Cámara de los Comunes: “La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del Imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas del Imperio Inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto”.

Estados Unidos, en cambio, tardó semanas en reconocer formalmente al nuevo gobierno tras observar el desfile de figuras abiertamente antinorteamericanas que llegaban con la sublevación y el avance de sus competidores británicos detrás de las principales figuras del golpe.

Ni bien quedó claro que los sublevados estaban para quedarse, Hugo Di Pietro, máximo dirigente de la CGT, el mismo que llamó a defender a Perón hasta la muerte, se apuró para pedirle a sus afiliados que trabajaran

con normalidad. Ninguna de las acciones que prepararon los obreros peronistas contra el golpe fue autorizada por los jefes gremiales. El pragmatismo de Di Pietro le costó el puesto y poco después fue desplazado por Andrés Framini. La nueva conducción reclamó a los militares que negociaran con ellos y reforzaron su pedido con una huelga general el 14 de noviembre de 1955. Los militares clausuraron la CGT como única respuesta.

Halcones, palomas y cuervos

La presidencia de facto cayó en el general Eduardo Lonardi, un militar que en 1936 tuvo una destacada actuación en el intento de golpe de Estado liderado por el general ultranacionalista y judeófobo Juan B. Molina. En septiembre de 1951 se sumó a la rebelión militar liderada por el general Mario B. Menéndez, hecho que le valió la baja y pasar un año de encierro limpiando los pisos de la prisión federal de la calle Las Heras.

Lonardi llegó a Buenos Aires para asumir la presidencia en un avión que tenía a su costado la leyenda “¡Cristo Vence!”, la misma que llevaban los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en junio de 1955. Detrás del presidente de facto siempre hubo un miembro de la curia susurrando pedidos de carácter moralista. Por eso una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue anular la Ley de Divorcio y casi toda la legislación progresista promulgada en el peronismo. Luego se ilegalizó la prostitución y se emprendió una política de razias contra las prostitutas y los hoteles de citas.

En el gabinete del golpe se volvía a oler a pólvora e inciensos. En el Ministerio de Educación fue colocado Atilio Dell’Oro Maini, un intelectual ultracatólico y antisemita que dirigió la revista clerical *Criterio*. El filonazi Mario Amadeo fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y el hitlerista Juan Carlos Goyeneche vocero presidencial. El ex secretario de Hacienda de Uriburu, Raúl Prebisch, fue puesto al frente del Ministerio de Economía.

El nombramiento del abogado del gremio metalúrgico Luis Cerrutti Costa al frente del Ministerio de Trabajo hizo que los sindicatos creyeran que el gobierno golpista buscaría un diálogo con las bases peronistas. Más se ilusionaron cuando Lonardi dirigió su furia contra los adversarios de la moral cristiana y dejó en un lugar secundario a los peronistas, a los que

apaciguó con su lema “Ni vencedores, ni vencidos”, el mismo que usara el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza tras el derrocamiento de Juan M. de Rosas en 1852.

Lonardi y sus seguidores habían abrevado en el antiperonismo impulsados por el rechazo al ambiente modernizador en lo moral del último tramo del anterior gobierno, pero no rechazaban las ideas nacionalistas impresas en el dogma justicialista.

Recordemos además que el presidente de facto llegó a la cima de su carrera gracias a que no había dado muestras de incomodidad con el peronismo hasta 1951 y que su distanciamiento tardío se debió a la disputa entre Perón y la Iglesia. El almirante Isaac Rojas, líder del golpe en la Marina y vicepresidente de facto, también protagonizó una mutación política. Había logrado sucesivos ascensos gracias a su fidelidad al régimen peronista e incluso mostró su lealtad al negarse a autorizar la salida de tropas de la Marina para que se sumasen al intento de golpe de junio de 1955. Se transformó súbitamente en antiperonista luego del bombardeo a la Plaza de Mayo, cuando aceptó defender al contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri, el ex jefe de la Marina, que era juzgado en un tribunal militar por haber participado en la asonada.

El día de la asunción de Lonardi y Rojas, se congregó una multitud cercana a las 150.000 personas en Plaza de Mayo. Los manifestantes vitorearon a las tropas y gritaron consignas contra sus adversarios, tales como “Argentinos sí, nazis no” o “San Martín sí, Rosas no”. Esta vez fueron los peronistas los que mascaron furia e impotencia en sus casas.

Pero la Revolución Libertadora también se encontraba fragmentada. Por un lado estaba el grupo nacionalista católico encabezado por general Lonardi, que pretendía sumar a los gremios y partidos políticos a un esquema corporativista y católico. Los unía la religión católica y la nostalgia por el orden colonial. Incluso compartían con el peronismo los mismos enemigos, que iban desde los Estados Unidos y el liberalismo hasta los grupos de izquierda.

El otro grupo nacionalista, liderado por el vicepresidente, el Almirante Isaac Rojas, y por el general Pedro Eugenio Aramburu, pretendía aplicar la mano dura para destruir todo vestigio de peronismo. En donde los sectores católicos buscaban revitalizar la alianza con Gran Bretaña, sus adversarios dentro del golpe no veían problema en acercarse a los EE.UU. para

sumarse a la incipiente alianza occidental liderada por los países capitalistas. Sus ideas económicas aceptaban ciertos aspectos del modelo liberal, aunque primordialmente para oponerse al sustento ideológico del peronismo y debilitar los factores que le daban poder político concreto. Sin embargo, en los hechos, hicieron poco para desarmar el control del Estado sobre la economía erigido desde tiempos de Uriburu e imponer en su lugar un modelo de libre mercado. Menos aún creían, al igual que los miembros del grupo de Lonardi, en las libertades individuales tal como se supondría que debería suceder con los auténticos liberales.

Algo tenían en común los militares golpistas: la mayoría pertenecía a la clase media católica afectada por el cambio en la estructura social que privilegiaba el ascenso de las clases subalternas o priorizaba ascensos y beneficios económicos entre los oficiales leales.

Entonces, para muchos golpistas, el objetivo estratégico de la revolución del 55 no se limitaba a la remoción del presidente. Se trataba de proceder al desmantelamiento de toda la estructura populista creada por Perón en una década de gobierno y beneficiarse con un nuevo esquema de distribución de la riqueza que privilegiara sus intereses.

Mientras Lonardi hablaba de concordia, los comandos civiles amparados por la Marina y el sector de Aramburu seguían adelante con sus ataques. El presidente de facto intentó contener a los sectores que los incitaban, pero el 13 de noviembre de 1955 sus enemigos dentro del golpe lo derrocaron. Furioso, el militar se apresuró a publicar una carta que decía: “Comunico al pueblo que no es exacto que haya presentado mi renuncia al cargo de presidente provisional, o que mi salud tenga algo que ver con mi retiro de la Casa de Gobierno. El hecho se ha producido exclusivamente por decisión de un sector de las Fuerzas Armadas”.

Lonardi fue sucedido por el general Pedro E. Aramburu. El nuevo gabinete se pobló de reconocidos antiperonistas y conservadores. Aramburu se apuró a firmar el acuerdo hemisférico anticomunista promovido por Washington y corrió a confirmar la participación argentina en las instituciones multilaterales de crédito que patrocinaban las potencias capitalistas.

Con la asunción de Aramburu y la continuidad del almirante Rojas en la vicepresidencia, se profundizó la caza de brujas. Una Junta Consultiva Nacional formada por los militares y representantes de todos los partidos políticos que colaboraron con el golpe, había comenzado a funcionar el 11

de noviembre de 1955 con la misión de “desperonizar” a la Argentina. Una de las primeras medidas fue proscribir al Partido Justicialista y a todas sus agrupaciones satélites mediante el decreto 3.855 del 13 de noviembre de 1955. A poco de comenzar a funcionar, los socialistas se retiraron de la Junta Consultiva disconformes con participar de la política de represalia.

En octubre de 1955, la Comisión General de Investigaciones inició un juicio contra el ex presidente Perón. Fue una parodia de proceso, cuyo veredicto en ausencia estaba cantado incluso antes de que los miembros del tribunal fueran nombrados. De allí surgieron mitos sobre fortunas fantásticas atesoradas por Perón, aunque el líder justicialista tuvo que apelar a la ayuda de sus amigos para sostenerse en su exilio. Si bien hubo una investigación sobre casos reales de corrupción, el resto de los argumentos usados para condenarlo fueron sin lugar a dudas forzados. La misión de esa Comisión era desprestigiarlo para justificar ex post facto el golpe y darle una pátina de racionalidad a la política de revancha.

Un tribunal militar condenó finalmente a Perón por 121 delitos. Se lo privó de su cargo militar y se le prohibió usar el uniforme del Ejército Argentino, una afrenta grave para cualquier soldado. Con él, un millar de oficiales y suboficiales peronistas fueron echados de las Fuerzas Armadas.

El decreto 4.258 de marzo de 1956 prohibió ejercer cargos públicos a aquellos que hubiesen sido funcionarios del gobierno peronista. A través de la Junta de Recuperación Patrimonial se hizo un juicio de residencia a los funcionarios del peronismo invirtiendo la presunción de inocencia y obligándoles a demostrar que sus bienes habían sido obtenidos con honestidad. Cerca de 150.000 delegados gremiales fueron dejados cesantes. La conflictividad laboral no se disparó porque la CGT fue intervenida. El combo represivo de Aramburu fue usado para congelar los salarios y liberar los precios sin temer la reacción de las organizaciones sindicales.

La persecución se nutrió de la denuncia de ciudadanos comunes, que en ocasiones tomaban revancha de punteros y afiliados del peronismo delatándolos ante las autoridades con acusaciones muchas veces cuestionables. Si en el pasado el Menorah delataba al judío ante la Inquisición, ahora esa misma función era cumplida por las estampas de Perón o los jugetes de la Fundación Evita.

Es cierto que los golpistas dieron libertad a miles de presos políticos encerrados por el peronismo, pero también que dejaban las celdas libres

sólo para hacerle lugar a los miles que ellos detenían, sin proceso judicial la mayor parte de las veces.

Tal era el caudal de presos que cosechaba el régimen militar, que en diciembre de 1955 se vio obligado a reabrir el penal de Tierra del Fuego, cerrado por insalubre durante la anterior gestión. En ese presidio situado al borde del círculo polar antártico, los presos vivían en calabozos cuya temperatura podía llegar a veinte grados bajo cero y aun así los guardias acostumbraban apagarles la calefacción de las celdas y cortarles el agua por largos períodos. Las cárceles atestadas fueron complementadas con barcos de la Marina que actuaron como improvisadas mazmorras flotantes y hasta se usó para ese fin el edificio del Congreso Nacional, en donde algunos peronistas fueron brutalmente atormentados por los comandos civiles. Ningún juez parecía dispuesto a tomar las repetidas denuncias de torturas que se presentaban.

La Libertadora se apuró a crear sus propios héroes entre los que habían sido perseguidos por el gobierno anterior. En medio de una gran pompa, el escritor Jorge Luis Borges fue puesto a cargo de la Biblioteca Nacional y premiado por su “resistencia”. Silvina Ocampo fue nombrada presidente del recién creado Fondo Nacional de la Artes. El doctor Bernardo Houssay recuperó su cátedra y se lo puso a cargo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Mientras tanto, artistas y empresarios asociados al justicialismo eran encarcelados o integrados a las listas negras. A Carlos “El Mono” Gatica, uno de los iconos deportivos del peronismo, le fue quitada su licencia de boxeador. También se prohibió la difusión de la obra del intérprete oficial de “La Marcha Peronista”, el cantante Hugo del Carril, y luego se lo envió a la cárcel.

Ernesto Sabato fue uno de los primeros en denunciar los crímenes de La Libertadora. El escritor había apoyado el derrocamiento de Perón. Pero en septiembre de 1956, la revista *Mundo Argentino*, de la cual era director, publicó una nota donde denunciaba la detención arbitraria y la tortura sistemática de militantes peronistas tanto en la Penitenciaría de la calle Las Heras como en el sótano del Congreso Nacional.

La editorial Haynes, propietaria de la revista, despidió a Sabato luego de recibir una sugerencia gubernamental para que se deshiciera del escritor o enfrentara una reducción de la cuota de papel que distribuía el Estado.

La Sociedad Argentina de Escritores se sumó a la persecución y le prohibió que hiciera uso de la palabra en los actos de la entidad.

Este acto de censura quedaría reducido a poco al ser comparado con una de las decisiones más recordadas y célebres dentro de la historia de la intolerancia argentina.

Prohibido decir el nombre

Si Perón fue criticado por tratar de imponer su doctrina, sus adversarios iban a mostrar que no eran tan distintos. El 5 de marzo de 1956, el gobierno de La Libertadora promulgó el decreto 4161 por el que se castigaba con hasta seis años de prisión a los que utilizaran el nombre, fotografía, escultura o retrato de Perón, de sus parientes y partidarios. Los medios recibieron instrucciones de reemplazar el nombre de Perón por eufemismos tales “dictador depuesto” o “tirano prófugo”.

Las obras públicas más representativas del gobierno peronista fueron rebautizadas, abandonadas y demolidas como represalia. La Ciudad de los Niños, un parque de diversiones inaugurado en las afueras de La Plata el 26 de noviembre de 1951, fue clausurada y permaneció en el olvido por décadas. El propio Walt Disney se había asombrado de esta obra bastante antes de crear su famoso Disneyworld. Pero el hecho que fuera construida por el peronismo fue motivo suficiente para su cierre.

El albergue Warnes, un monumental proyecto destinado a crear el mayor centro pediátrico del país, estaba a medio hacer cuando Perón fue derrocado. Permaneció sin finalizar hasta marzo de 1991, fecha en que fue dinamitado hasta los cimientos por orden de otro gobierno peronista.

En un frenesí histórico, las calles, buques, edificios y localidades que llevaban nombres peronistas recibieron nuevas denominaciones. De repente, llegar a un sitio determinado era una odisea ante los nombres de lugares y las calles que habían sido alterados abruptamente en nombre de la revolución. En esos días, el modo de nombrar las cosas con su nombre peronista o golpista se tornó un modo de fijar posición ideológica.

Otras acciones del antiperonismo también lindaron con la estupidez. Una de las más burdas fue la alteración de una fotografía para mostrar a Perón te-

niendo relaciones homosexuales con el boxeador norteamericano Archie Moore o la difusión de historias sobre una ajetreada vida sexual de Evita antes de conocer a Perón. Para los antiperonistas, todo valía a la hora de desprestigiar a sus enemigos, incluso caer en el ridículo.

Pero la furia se orientó también a disciplinar a la población justicialista. La quema pública de libros peronistas se inició el mismo día del golpe y se multiplicó en cientos de ceremonias privadas desde que el gobierno militar prohibió su posesión.

Nada parecía a salvo de la marabunta; miles de piezas de vajilla de la Fundación Eva Perón, adornadas con retratos de su fundadora y del ex presidente, fueron destruidas. Además arruinaron los equipos de respiración artificial de la Fundación, solamente porque tenían grabadas las figuras del general y su esposa. Cuando estalló una epidemia de poliomielitis en el verano de 1956, murieron decenas de niños al no disponerse de los pulmotores destruidos en la revancha. Las cuadrillas de olvidadores también echaron abajo la residencia de Alzaga Unzué en donde vivieron Perón y Evita. La demolición fue ordenada en los primeros días de diciembre de 1995 por el almirante Rojas, furioso por los ramos de flores “nomeolvides” que los peronistas dejaban a diario frente a la casa, en donde además expiró Evita en 1952.

Pero los militares de La Libertadora aún seguían sedientos de venganza contra Evita, que había osado fallecer antes de que pudieran sentarla en un estrado judicial. Luego de su muerte ocurrida el 26 de julio de 1952, su cadáver embalsamado permanecía en un salón de la sede central de la CGT. Un grupo de militares, entre los que estaban el general Aramburu, el almirante Rojas y el jefe de inteligencia del Ejército, Carlos Moori Koenig, ideó un plan para mostrar hasta donde llegaban sus ánimos de desquite.

En la noche del 22 de noviembre de 1957 una partida militar al mando de Moori Koenig se robó a punta de pistola el cuerpo de la difunta. En el tiempo que estuvo desaparecido, el cadáver fue objeto de negociaciones secretas, promesas incumplidas y hasta de un posible ultraje necrofílico a manos de Moori Koenig.

Los militares sacaron del país a la momia de Evita el 8 de febrero de 1957. Fue enterrada en secreto en el cementerio de la ciudad italiana de Milán con el nombre falso de María Maggi de Magistris y dejada bajo custodia de las autoridades del Vaticano. En la misión del traslado estuvo

involucrado el coronel Alejandro Agustín Lanusse, posteriormente convertido en presidente de facto² y el almirante Francisco Manrique, Jefe de la Casa Militar.

La Revolución Fusiladora

Al producirse el golpe del 55, la mayor parte del peronismo había fluctuado entre la apatía y el desinterés a la hora de defender a su gobierno. Esa desmovilización dejaba al exilado Perón en una posición de debilidad frente a sus adversarios.

A Perón le quedaba entonces probar el camino del desgaste. La orden Secreta N° 1 que emitió desde Caracas el 1° de enero de 1956 decía: “Es menester no dar tregua a la tiranía. El trabajo a desgano, el bajo rendimiento, el sabotaje, la huelga, el paro, el desorden, la lucha activa por todos los medios y en todo lugar debe ser la regla”. En otra carta, ordenaba “apurar un desenlace violento, aunque ello parezca un poco cruento” y aconsejaba “cuanto más violentos seamos mejor: al terror no se lo vence sino con otro terror superior” para luego ordenar la muerte de adversarios con la idea de que “...si hay que matar sin remedio, es mejor que ello sea rápido y cuanto antes”.

A poco de comenzar su exilio designó al ex diputado John William Cooke como su delegado personal y lo puso al frente de la Resistencia Peronista.

El líder justicialista ordenó en 1956 la clandestinidad y la descentralización de las acciones de la Resistencia dejando que la iniciativa del lugar y momento de cada medida surgiera también de sus partidarios. En sus palabras, se trataba de llevar adelante “miles de acciones de todo tipo realizadas por todos individual y colectivamente”. La idea de la descentralización sembraría el germen de la autonomía de los grupos resistentes y llegada la década del setenta el general necesitaría de algo más que de sermones para reencauzarlos en su esquema político.

La Resistencia Peronista era en realidad un conjunto disperso y anárquico de células formadas por obreros y jóvenes de clase media y baja. Ya que la conducción de la CGT había sido un fiasco a la hora de armar una respuesta al golpe, Perón dio instrucciones para que se echara mano a “la

gente joven y decidida que, a cada momento nos demuestra de lo que es capaz la masa organizada y adoctrinada” para “luchar con la más grande energía y la mayor violencia”. Sus líderes eran aquellos dirigentes del partido que se habían salvado del arresto o cualquier peronista dispuesto a ejecutar medidas de acción directa.

El 9 de junio de 1956 por la noche, un grupo de civiles y militares peronistas del Movimiento de Recuperación Nacional liderados por el general Juan José Valle se alzaron contra el gobierno de facto. Mientras los oficiales intentaban la toma de algunos cuarteles en Buenos Aires y La Plata, comandos urbanos trataron de copar cuarteles en Rosario y La Pampa.

Los sublevados no buscaban devolverle el mando a Perón, sino que pretendían forzar una negociación con los golpistas que le permitiera regresar a la Argentina y terminar con la proscripción de su partido. Además reclamaban la liberación de los presos políticos, elecciones libres y la restitución de la Constitución de 1949, declarada nula por Aramburu el 27 de abril de 1956³.

Pero la inteligencia militar estaba al tanto de lo que iba a suceder y dejó que todo siguiera adelante. Se gestaba un escarmiento vehemente dirigido a todos los peronistas.

Al llegar la noche del 9 de junio, la rebelión ya había fracasado. El presidente de facto Aramburu estableció la ley Marcial y ordenó juzgar en forma sumaria a los insurrectos.

En total habrían sido fusiladas 31 personas al terminar el 11 de junio. El general Valle había escapado a su captura, pero se entregó al saber que sus hombres estaban por ser ejecutados. El capitán Francisco Manrique le había prometido respetar su vida si se rendía. A pesar de ello, fue fusilado el 12 de junio. Los partidos políticos que acompañaban al golpe apoyaron a través de la Junta Consultiva las medidas tomadas por Aramburu.

La mayoría de los civiles ejecutados no tenían relación alguna con el levantamiento. Cinco personas fueron asesinadas por la policía bonaerense en un basural de la localidad de José León Suárez, al sur de la capital. Luego se conocieron otros asesinatos ocurridos en las comisarías bonaerenses. La matanza de León Suárez fue investigada y denunciada por el periodista Rodolfo Walsh en su clásico *Operación masacre*. Curiosamente, uno de sus hermanos era aviador de la Armada y como tal había participado del bombardeo a la Plaza de Mayo un año antes de la masacre.

Perón tuvo duras palabras con los amotinados. En una carta que le dirigió a Cooke el 12 de junio de 1956, le dijo: "... en vez de pensar en revoluciones militares, el pueblo tiene que hacer guerra de guerrillas". También expresó su insatisfacción por los "militares que nos prometen una revolución cada fin de semana. Ellos ven el estado popular y quieren aprovecharlo para sus fines o para servir a sus inclinaciones de 'salvadores de la Patria'".

La necesidad de los jefes de La Libertadora de usar el asesinato como herramienta política no quedó satisfecha. El 24 de mayo de 1957, a instancias del nuevo embajador argentino en Venezuela, el general Carlos Toranzo Montero, un comando argentino colocó un explosivo en el auto que usaba Perón en Caracas. Sus asistentes, Ramón Landajo e Isaac Gilaberte, descubrieron el artefacto. En un raptó de audacia, Gilaberte decidió llevarse el auto lejos. La bomba detonó en una calle un minuto después, hiriéndolo levemente. Entre los restos de la bomba pudo descubrirse una inscripción que indicaba que había sido fabricada en la Argentina.

Pese a las acciones de la Resistencia Peronista, el gobierno militar no cedió un milímetro en su decisión de impedir que el peronismo volviera al poder y mantuvieron su proscripción cuando se decidió llamar a elecciones en 1958.

Para ese momento Perón enfrentaba un dilema: desde que había partido al exilio no había tenido oportunidad de probar si su capacidad electoral seguía intacta. En 1957, cuando el gobierno de facto llamó a elecciones de constituyentes para reformar la Carta Magna peronista de 1949, el líder justicialista ordenó el voto en blanco. Obtuvo una mayoría del 24,3% de los votos, muy lejana al 62% que lo había apoyado en las últimas presidenciales. Pragmático, Perón decidió que era tiempo de buscar asociaciones para frenar el debilitamiento político.

El desarrollista Arturo Frondizi, un ex dirigente del ala conservadora radical que había formado su propia corriente partidaria, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), pactó con Perón una alianza. A cambio de la promesa de levantar la proscripción al peronismo cuando llegara al gobierno, obtuvo el apoyo del líder justicialista. El 23 de febrero de 1958, Frondizi fue electo presidente de la Nación con el 49% de los votos.

Notas

¹ Raúl Scalabrini Ortiz y el ex diputado Oscar Alende, afirmaron que Gran Bretaña habría aportado combustible y municiones para la flota rebelde, aunque las pruebas que presentan de tal colaboración resultan controversiales.

² Alejandro Lanusse había participado en el levantamiento contra el gobierno peronista en septiembre de 1951 bajo el mando del general Menéndez. Fue condenado a prisión por un tribunal militar e indultado luego por la Revolución Libertadora.

³ El historiador Alain Rouquié sostiene que Valle y sus seguidores tenían un plan para ejecutar a numerosas figuras del antiperonismo y que las casas de los condenados fueron marcadas con cruces rojas en la noche de la sublevación.